



XI Congreso Internacional de la AEHE
4 y 5 de Septiembre 2014
Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF)
Madrid

Sesión 17: La mano armada: violencia y armamentismo en la economía española contemporánea (coordinada por Fernando Mendiola y Oriol Sabaté)

Título de la comunicación: ¿Una peseta más en gasto militar supone una peseta menos en inversión, crecimiento y programas sociales? Defensa, economía y gasto social en España, 1950-2000.

Autor/es: José Jurado Sánchez

Filiación/es académica/s: Universidad Complutense de Madrid (Departamento de Historia e Instituciones Económicas I)

Dirección electrónica de contacto: jurado@ccee.ucm.es

¿Una peseta más en gasto militar supone una peseta menos en inversión, crecimiento y programas sociales? Defensa, economía y gasto social en España, 1950-2000.

José Jurado Sánchez
Universidad Complutense de Madrid

Introducción

¿Resultan mermados el crecimiento económico y el gasto social cuando se incrementa el gasto en defensa? Probablemente, la mayoría de la sociedad se decantaría por una respuesta afirmativa a esta interrogante dado el atractivo que tiene la intuición de que asignar dinero y personas a las fuerzas armadas es una carga que no impulsa la economía ni promueve el bienestar social. Lo gastado en armas no puede destinarse a la inversión o a programas sociales, mientras que aquellos que sirven como militares no pueden trabajar en otros sectores más productivos. Sin embargo, proporcionar una respuesta satisfactoria a esa pregunta es más complejo de lo que podría parecer, como se desprende de la lectura de los numerosos estudiosos que pretenden, desde hace décadas, solucionar el dilema de si gastar más en Defensa implica menos crecimiento económico y menos gasto social.

La disyuntiva de que todos los países han de elegir entre emplear sus recursos en fines civiles o militares se ha resumido con la expresión “cañones versus mantequilla”. Se trata de unos términos que los medios de comunicación estadounidenses empezaron a utilizar al informar sobre el mandato de la Ley de Defensa Nacional de 1916 de producir nitrato para fertilizante en tiempos de paz y municiones en épocas de guerra. Más tarde se recurrió a ellos para comparar el gasto en defensa de Estados Unidos y de otros países occidentales con el de Alemania durante la II Guerra Mundial y el de la Unión Soviética durante la guerra fría. En el ámbito académico, fue Samuelson (1948, pp.18-19) quien inició el uso de ambos términos cuando escribió que “para simplificar las cosas supongamos que sólo hay dos tipos de bienes que producir..., el famoso par de cañones y mantequilla”. Con ellos se dio nombre a una teoría simplificada del gasto nacional bruto que estipula que cualquier país ha de elegir entre dos opciones al utilizar sus recursos: puede optar por bienes civiles o militares o

por ambos en cantidades variadas. La curva resultante de tal elección es el ejemplo típico de la frontera de la posibilidad de producción, que muestra el coste de oportunidad consiguiente al hecho de que fabricar más cañones supone reducir la producción de mantequilla, y viceversa. Desde el punto de vista presupuestario, este dilema de las relaciones entre el gasto militar y el civil constituye un juego de suma cero por el que se genera una reducción del último cuando aumenta el primero, y al contrario. Se trataría, por tanto, de una relación inversa, una relación de sustitución entre el gasto militar y el civil que respaldaría la máxima de la sabiduría tradicional que asegura que si los gobiernos asignan más recursos a la defensa tendrán que destinar menos dinero a programas sociales.

Sin embargo, la investigación no ha proporcionado pruebas concluyentes que avalen que gastar más en lo militar tenga como consecuencia emplear menos recursos para programas sociales. Si bien los estudios pioneros, publicados desde fines de la década de 1960 hasta mediados del siguiente decenio, ofrecieron una respuesta positiva a la existencia de relaciones de sustitución entre la defensa, la economía y el gasto social, en la mayoría de los aparecidos a partir de entonces la balanza se inclinó hacia un resultado negativo o hacia la conclusión de que no hay pruebas consistentes de que destinar más recursos a la defensa tenga que suponer reducir los empleados en programas sociales. Estas páginas tienen por objeto examinar el dilema cañones-mantequilla en la España de la segunda mitad del siglo XX, una investigación de mucho interés por diversos factores. Aparte de por no haber sido estudiado en nuestro país, parece un tema relevante para la historia económica, la economía pública y la economía de la defensa. Además, la mayoría de los trabajos sobre las relaciones entre el gasto militar y el social se ocupan de países europeos durante la segunda mitad del siglo XX, el principal hábitat geopolítico y económico de España y el periodo en que nuestro país ha acelerado su proceso de convergencia con Europa. Por último, ha de repararse también en la actualidad de un asunto muy relacionado con unas finanzas públicas que sufren grandes penurias en España y en otros muchos países occidentales. La bibliografía académica sobre el dilema cañones-mantequilla muestra que hay que elegir a la hora de financiar los diversos bienes o servicios públicos y que ello tiene repercusiones económicas y sociales de alcance que generan debates sobre la estructura del gasto público y la elección de las políticas a financiar. La financiación de los programas sociales es uno de los más destacados por los elevados gastos públicos que

genera y porque reduce los conflictos sociales al contrarrestar los efectos de la pobreza y la desigualdad.

Tras la introducción, en la sección 2 se presenta abreviadamente el estado de la cuestión sobre las interrelaciones entre la defensa, la economía y el gasto social, haciendo hincapié en los resultados de la investigación y en sus fundamentos teóricos y metodológicos. En la sección 3 se comparan las evoluciones del coste de la defensa, el PIB y el gasto en educación para comprobar si en la España de la segunda mitad del siglo XX el gasto militar habría aminorado el crecimiento, vía reducción de la inversión, disminuyendo los recursos públicos disponibles para un bien preferente tan relevante como la educación. En la sección 4 se analiza si en España, como en otros países, se produjo el “dividendo de la paz”, los beneficios económicos y sociales derivados de un coste de la defensa decreciente en relación con el gasto del Estado y la riqueza nacional. Por último, la sección 5 se dedica a las conclusiones y las perspectivas de investigación futuras. Con este trabajo se pretende presentar el tema estudiado, hacer ver su relevancia para la economía pública y la historia económica. Sus resultados son provisionales, tentativos, de adelanto de otros que, sin duda, exigirán nuevas investigaciones con nuevos planteamientos teóricos y metodológicos.

2. Esfuerzo militar, evolución económica y gasto social en el siglo XX¹

La mayoría de las obras publicadas entre finales de la década de 1960 y mediados de la siguiente concluyen que la defensa se habría financiado a costa del gasto social y la economía durante buena parte del siglo XX. Pryor (1968) halló que en Alemania Occidental, República Federal de Alemania, Estados Unidos, Grecia y Reino Unido, naciones en las que el gasto militar era relativamente importante, la defensa tuvo, entre 1950 y 1960, una relación de sustitución estadísticamente importante con la inversión, el consumo personal y el gasto civil corriente gubernamental, exceptuadas las transferencias. Para Russett (1969, 1970), en los Estados Unidos del periodo 1939-1968 el gasto militar redujo el consumo y la inversión privados y el gasto público en el nivel local y estatal, especialmente el destinado a asistencia social y a bienes preferentes como la sanidad y la educación, pagando el consumidor la mayor parte del coste de las

¹ Para un análisis más amplio de este asunto, véase Jurado Sánchez (2012)

fuerzas armadas, mientras que en el Reino Unido y la Francia de 1947-1965 la inversión también menguaba cuando aumentaba el gasto en defensa, pero no el consumo, ocurriendo lo contrario en Canadá. Hollenhorst y Ault (1971) precisaron que los efectos del gasto en defensa en Estados Unidos dependen de si se analizan periodos bélicos o pacíficos, concluyendo que durante grandes conflictos como la II Guerra Mundial la factura de la defensa la debió pagar el conjunto de la sociedad, mientras que en las guerras “menores” (las de Corea y Vietnam) y en las épocas de paz probablemente fue el consumidor el que la abonó en su casi totalidad. Otros autores hallaron relaciones negativas entre el gasto militar, por un lado, y la tasa de crecimiento del PNB, por el otro, en varios países industrializados durante las décadas de 1950 y 1960. Szymansky (1973), por ejemplo, estudió los 18 países más ricos del mundo y concluyó que aquellos con más cuantiosos gastos militares experimentaron un crecimiento económico menor, estando el gasto en defensa negativamente relacionado con la tasa de incremento del PNB por habitante. Hartman (1973) también encontró que la defensa había tenido repercusiones económicas negativas en los Estados Unidos del periodo 1946-1972, empeorando el beneficio empresarial, la balanza de pagos y el nivel de vida del consumidor medio -por la inflación creciente que generó. Wilensky (1975) defendió que, entre 1950 y 1966, el impacto depresivo mayor de la defensa en el gasto social en 16 países industrializados se dio durante los años de la guerra fría y los inicios de la carrera armamentística nuclear, especialmente en aquellos países más involucrados en ellas. Peroff (1976) aseguró que entre 1929 y 1971 el gasto en defensa estadounidense afectó negativamente a la sanidad y, sobre todo, a la asistencia social, por lo que los principales afectados por el gasto militar habrían sido los grupos de ingresos más bajos. Para Smith (1977), un gasto militar elevado originó, entre 1960 y 1970, la reducción de la inversión, un menor crecimiento de la productividad y una balanza de pagos más precaria en 15 economías capitalistas avanzadas. Por último, Smith (1980) concluyó que en los 14 países más industrializados de la OCDE el principal coste de oportunidad de la defensa entre 1954 y 1970 fue la minoración de la inversión.

Desde mediados del decenio de 1970 la mayoría de las investigaciones pusieron en cuestión que la financiación de la defensa afectara negativamente al gasto social. Así, para Caputo (1975), la sanidad no sufrió recortes por el gasto creciente en defensa en Estados Unidos, Reino Unido, Suecia y Australia entre 1950 y 1970, mientras que la relación negativa que estimó entre el gasto militar y la educación no era

estadísticamente significativa. Clayton (1976) no encontró que existiera ninguna relación significativa entre el gasto militar y el social en los Estados Unidos del periodo 1900-1976, excepto durante las dos grandes guerras mundiales, que originaron un gran impacto negativo en los programas sociales siempre que se incluyera la deuda pública en el análisis. Por su parte, Peroff y Podolak-Warren (1979) concluyeron que entre 1929 y 1974 el gasto militar estadounidense no perjudicó al gasto total federal final en sanidad o en personal e I+D sanitarios, aunque sí a la inversión privada en sanidad. Russett (1982) defendió, frente a lo que sostuvo en su trabajo de 1969, que el gasto militar, el educativo y el sanitario aumentaron en Estados Unidos al mismo tiempo durante la mayor parte del periodo 1941-1979. La investigación de Domke, Eichenberg y Kelleher (1983) mostró que, al menos durante los periodos de paz, el gasto social experimentó intensos aumentos, mientras que la defensa decreció en Estados Unidos, República Federal de Alemania, Francia y el Reino Unido entre 1948 y 1978, tanto en relación con el gasto público total como con el PNB. Mintz (1989) no halló que en los Estados Unidos del periodo 1947-1980 las partidas principales del gasto militar repercutieran negativamente en el gasto social, excepto en los años de Reagan. Así, el crecimiento de lo abonado por el personal militar no fue suficiente para sustituir o reducir la demanda de sanidad, educación o vivienda, contrariamente a lo que el autor esperaba del hecho de que las fuerzas armadas proporcionaran estos bienes preferentes al personal militar. Tampoco el aumento de los fondos destinados a la compra de armamento y equipamiento limitó o alivió la demanda de programas sociales, pese a su hipótesis de que las industrias que proveían el armamento y el equipamiento militares empleaban a trabajadores cualificados y bien remunerados que raramente necesitaban de los servicios públicos sanitarios o de la asistencia social. Para Berry y Lowery (1990), los conflictos militares y la carrera de armas con la Unión Soviética impulsaron el gasto en defensa en Estados Unidos entre 1949 y 1983, mientras que el gasto social resultó favorecido por una tercera edad numerosa. El trabajo de Mintz y Huang (1991) es uno de los pocos publicados a partir del decenio de 1980 que defendió la existencia de relaciones de sustitución. Ambos estudiosos hallaron que directamente, a corto plazo, el gasto militar no redujo el social, pero al estudiar el asunto en el largo plazo (concretamente, en los Estados Unidos del periodo 1953-1987) llegaron a la conclusión opuesta. En su opinión, en un lapso de tiempo de unos seis años, los costes crecientes de la defensa minoraron la inversión, lo que a su vez disminuyó el crecimiento económico

y, consecuentemente, limitó la capacidad de los gobiernos de asignar más recursos a los programas sociales, concretamente a la educación.

Mok y Duval (1992) sostuvieron que, entre 1954 y 1986, los incrementos del gasto en defensa en Estados Unidos no originaron disminuciones en la financiación pública de la educación y la seguridad social, aunque sí en la de la sanidad y en áreas como la agricultura, la energía, el transporte y el comercio, siempre que se incluyeran el déficit y la deuda en el análisis. Yildirim y Sezgin (2002) sugieren que en la Turquía del periodo 1924-1996 se produjeron relaciones de sustitución entre el gasto militar y el social, siendo negativas las existentes entre la defensa y la sanidad y positivas entre la defensa y la educación. A su juicio, estos resultados respaldan la idea de que un gasto militar creciente reduce los recursos disponibles para la salud, pero no los destinados a educación. Por último, Gifford (2006) halló que, de las 17 naciones industrializadas y desarrolladas del periodo 1960-1993 que estudió, aquellas que contaban con fuerzas armadas grandes en relación con la población hicieron un esfuerzo menor en pro del gasto social, mientras que en las que el reclutamiento se efectuaba mediante el servicio militar obligatorio se gastó en fines sociales una proporción mayor de la que se empleó en los países cuyas fuerzas armadas se nutrían de voluntarios.

Las diferencias que se perciben en los resultados de los estudios sobre el dilema cañones-mantequilla se deben a causas diversas de carácter teórico o conceptual, metodológico y estadístico, influyendo también la naturaleza de los datos utilizados. Un rasgo acusado de la investigación ha sido la preocupación por la mejora de los fundamentos teóricos, que se fueron haciendo más complejos y comprensivos con el paso del tiempo. Ello se percibe en el desarrollo teórico de las relaciones de sustitución entre capítulos presupuestarios, la formulación de hipótesis, la tendencia a elaborar explicaciones multifactoriales, la consideración de los efectos indirectos y de largo plazo del gasto militar o la opción por análisis agregados o desagregados. De las tres categorías de relaciones de sustitución que Domke, Eichenberg y Kelleher (1983: 21) distinguieron, la mayoría de los estudiosos optó por las de largo plazo, aquellas que se dan cuando existe un vínculo negativo entre las tendencias de la parte de la renta nacional o del presupuesto absorbidas por la defensa y la del gasto social. Otros investigadores continuaron desarrollando el concepto de relaciones de sustitución entre capítulos presupuestarios. De las dos categorías que concibieron Berry y Lowery (1990:

672-680), destacan las dos modalidades de fondo fijo: la elección secuencial, en la que se precisa primero la suma a asignar a un capítulo y la cantidad restante se destina a los otros, y la elección simultánea, en la que la decisión sobre las asignaciones a unos y otros capítulos se toma al mismo tiempo.

En cuanto a las hipótesis, las que formularon las investigaciones pioneras eran intuitivas, escasas, sencillas y, a veces, implícitas. En ellas se aspiraba a validar o refutar, por ejemplo, si “existieron relaciones de sustitución entre el gasto en defensa y los gastos civiles” (Pryor, 1968). Hipótesis de este tipo se elaboraron también en otros trabajos (Russett, 1969; Hollenhorst y Ault, 1971; Hartman, 1973; Wilensky, 1975; Clayton, 1976), pero, poco a poco, fueron dejando su lugar a otras más numerosas, completas y complejas que, además, se hicieron siempre explícitas. Un ejemplo de ellas son las formuladas por Peroff y Podolak-Warren (1979), destacadamente la que preveía que el aumento del gasto en defensa afectaría negativamente a la sanidad privada cuando aquél se financiara con aumentos de impuestos en lugar de con incrementos de oferta monetaria o de deuda pública, pero también las de Domke, Eichenberg y Kelleher (1983), Mintz (1989), Mok y Duval (1992), Gifford, (2006)... Por lo que se refiere a los factores influyentes en la asignación de recursos, los estudios pioneros teorizaron sobre un número limitado de ellos. Por ejemplo, Russett (1969) consideró los diversos componentes del PIB y la evolución del gasto militar y la del gasto en educación, sanidad y asistencia social. Caputo añadió el gasto total. Otros autores incluyeron, además de algunas de las variables citadas, la situación internacional y el sistema político (Pryor, 1968; Wilensky, 1975), el PNB per cápita o los años de paz o guerra, gastos sociales como la vivienda o las ayudas a los pobres (Peroff, 1976), la deuda pública, ya que se creía que el gasto, militar o civil, se financió con ella (Clayton, 1976), etc. A partir de la década de 1980 se incluyeron muchos más factores y se intentó articularlos en una explicación multifactorial más comprehensiva. Así, Russett (1982) pensaba que la resolución del dilema cañones-mantequilla sería más factible si se tenían en cuenta una variedad de influencias diversas de naturaleza económica, social y política, o relativa a las relaciones internacionales. Consideró la evolución de la tasa de aumento del PNB y de la productividad y la utilización de la capacidad de producción porque creía que afectaron a la cuantía y evolución del gasto público. Incluyó asimismo la población menor de 18 años y la mayor de 65 porque pensaba que el gasto educativo y sanitario se veían influidos, respectivamente, por el número personas en edad de

adquirir formación o de recibir asistencia sanitaria más asiduamente. Por último, para valorar aquello que podía afectar al gasto militar consideró que el número de muertos en combate reflejaría la situación internacional y la existencia de guerra o paz. Domke, Eichenberg y Kelleher (1983) añadieron la tensión existente entre la Unión Soviética y los países occidentales, mientras que para examinar la evolución del gasto social tuvieron en cuenta, aparte del estado de la economía y el ingreso público, la situación política y social. Creían que algunas características de ésta podían favorecer el impulso de los programas sociales. Se referían a la cuantía de los parados; el número de parlamentarios de izquierda, por tenerse como más partidarios de los programas sociales; la ideología de los primeros ministros y el apoyo con que cuentan en las cámaras; el año de la elección presidencial, en el que los gobernantes suelen incrementar el gasto social para atraer a los votantes. Por último, pensaban que el gasto público total dependía de las variaciones anuales en el ingreso público y el tamaño del déficit o superávit, las medidas fiscales adoptadas para influir en la situación económica y las variaciones en el crecimiento real del PIB, en el coste de la vida y en la tasa de desempleo. Berry y Lowery (1990) tuvieron en cuenta, además de algunos de estos factores, el número de pobres a la hora de valorar el gasto social, bajo la lógica suposición de que la evolución de aquél influye habitualmente en la cuantía de éste. Mintz y Huang (1991) innovaron en la conceptualización de los factores influyentes al añadir la inversión agregada (por ser un elemento crucial del crecimiento económico), la amortización (por ser una parte constante de la dotación de capital) y la tasa de aumento del empleo civil. Mok y Duval (1992) incluyeron el déficit y la deuda, sobre la base de que permiten gastar más en todos los capítulos presupuestarios, sean militares o civiles, sin tener que menguar ninguno. Además de considerar elementos idénticos a los utilizados por otros autores y por razones parecidas, Gifford (2006) añadió otros novedosos porque consideraba que influían en el gasto social. Entre ellos se cuentan el personal militar como tanto por ciento de la población total, el gasto en seguridad social como porcentaje del PIB, la magnitud con la que las naciones recurren al servicio militar obligatorio para reclutar el personal de sus fuerzas armadas, el PIB per cápita medido en paridad de poder adquisitivo, el porcentaje de sindicalistas en relación con la población activa, el número de días de trabajo perdido por cada 1.000 trabajadores debido a convocatoria de huelgas, el porcentaje de votantes en las elecciones generales anteriores, la existencia de “situaciones de veto en la estructura constitucional”, que

favorecen a pequeños grupos de interés, y las variaciones porcentuales anuales en los precios y el ingreso público total como porcentaje del PIB.

Los estudiosos del dilema cañones-mantequilla se han centrado, en general, en analizar las relaciones entre el gasto militar y el social de manera agregada, seguramente por suponer que el primero tiene efectos homogéneos en el segundo. En varios de ellos se ha comparado el gasto total en defensa con el gasto público total o social (Szymansky, 1973; Wilensky, 1975; Clayton, 1976; Domke, Eichenberg y Kelleher, 1983). Pero, con el paso del tiempo, lo más frecuente fue que las investigaciones compararan el gasto militar total con uno o varios componentes del gasto social (sanidad y educación, sobre todo, pero también vivienda, asistencia social y departamentos de gasto corriente), así como las partidas principales del gasto militar con el gasto social (Peroff y Podolak-Warren, 1979; Russett, 1982; Mintz y Huang, 1991; Mok y Duval, 1992; Gifford, 2006). Los autores que optaron por el enfoque desagregado lo justificaron con el argumento de que no hay razón a priori para suponer, por ejemplo, que la compra de armamento tenga el mismo efecto en el gasto social que las retribuciones del personal militar, el aprovisionamiento o el mantenimiento de las unidades o el dinero destinado a investigación y desarrollo en las fuerzas armadas (Mintz, 1989). La elección de enfoques agregados o desagregados también hubo de influir en los resultados de las investigaciones.

Además de por los diversos fundamentos teóricos, los resultados de la investigación sobre el dilema cañones-mantequilla han tendido a divergir por el recurso a variadas técnicas estadísticas y metodologías e incluso por el uso de datos de naturaleza diversa. Sin olvidar la influencia generada por la realización de análisis transversales (esto es, muestras en un momento del tiempo) y longitudinales (series temporales), los cuales parecen, por otra parte, más adecuados para estudiar un asunto que requiere hacer inferencias sobre procesos dinámicos, dado que la comparación entre países proporciona resultados más sólidos si se examinan los efectos a largo plazo. Sólo en unos pocos estudios (por ejemplo, Wilensky, 1975), llevados a cabo en los primeros años, se recurrió únicamente a estudios con una muestra de países en un único momento del tiempo. En este estudio y en otros, el problema quizá radique en que el periodo analizado es relativamente breve, lo que impide que las generalizaciones sean sólidas y que las pruebas empíricas revelen oscilaciones notables en sub-periodos significativos. La mayoría de los trabajos publicados hasta mediados del decenio de 1970 utilizaron

series temporales que no llegaban a los veinte años, oscilando el intervalo predominante entre los 10 y los 18 años. Por el contrario, las investigaciones hechas posteriormente se basaron, en casi todos los casos, en series temporales superiores a los 30 años. También la cronología elegida es un factor a considerar a la hora de explicar las diferencias entre los resultados de la investigación, variando las conclusiones en función de si se opta por periodos de paz o bélicos y de si se aíslan o no los efectos de unos de las consecuencias de los otros. La mayoría de los estudios incluyen etapas pacíficas y todos o algunos de los siguientes conflictos: la II Guerra Mundial, las guerras de Corea y Vietnam y la guerra fría. Sólo en parte de ellos se tiene en cuenta la II Guerra Mundial (Russett, 1969; Hollenhorst y Ault, 1971; Peroff, 1976; Clayton, 1979; Peroff y Podolak-Warren, 1979), un periodo de gran crecimiento del gasto militar, el cual, sin embargo, se excluye en los estudios posteriores a 1979. La mayoría de las investigaciones tienen en cuenta, por el contrario, esas otras guerras “menores” o latentes, que afectaron, sobre todo, a Estados Unidos, pero también a otros países occidentales, además de periodos como la década de 1970, en las que se produjeron elevados gastos civiles y un estancamiento de los militares en la mayoría de los países occidentales. En la obtención por Caputo (1975) de coeficientes positivos entre el gasto militar y el social, por ejemplo, debió influir el que sus estimaciones se basen en valores absolutos del gasto en un periodo (1950-1970) en que la economía creció con intensidad. Por su parte, Domke, Eichenberg y Kelleher (1983) llegaron también a resultados diferentes en función de si incluían o no en el análisis los años de la guerra de Corea y los inicios de la guerra fría (1948-53). Los gastos militares en Estados Unidos, la República Federal de Alemania y el Reino Unido crecieron tanto en ese periodo que dieron lugar a grandes coeficientes negativos en la relación entre la defensa y el gasto social.

Algunos autores han basado sus cálculos en las variaciones de las cifras totales o per cápita de los gastos, mientras que otros, más numerosos, los hicieron a partir de las fluctuaciones de los porcentajes, lo que parece más adecuado dado que el proceso de asignación presupuestaria es un juego de suma creciente representado por un sector público en expansión. La medida más frecuentemente utilizada es el tanto por ciento que los capítulos presupuestarios suponen respecto del gasto total o del PIB. Para completar sus resultados se ha hecho uso de otras: el gasto militar por habitante, la variación porcentual anual de los gastos, que mide cuánto cambia la asignación a un capítulo presupuestario del año actual en relación con su asignación del año anterior

(Russett,1982; Domke, Eichenberg y Kelleher,1983), el tanto por ciento de variación de cada capítulo presupuestario respecto al gasto total (Gist, 1982), y la variación porcentual relativa (el porcentaje de los aumentos en relación con los porcentajes de los totales existentes) (Mok y Duval (1992). Por último, el uso de datos de diferente naturaleza también ha debido de influir en la diversidad de los resultados de las investigaciones. La mayoría de los autores basan sus trabajos en las cifras del gasto total final o gasto liquidado, seguramente sobre la base de que son preferibles a otras porque permiten el estudio de los resultados definitivos del presupuesto y facilitan las comparaciones internacionales. No obstante, algunos estudiosos recurren a otras cifras. Por ejemplo, Pryor (1968: 26-32, 318) aboga por el concepto “gastos de consumo público” frente al de gastos públicos, porque cree que, aunque éste es más amplio e incluye todos los desembolsos presupuestarios, es menos útil analíticamente que el primero. La investigación de Peroff y Podolak-Warren (1979) revela cómo difieren los resultados en función del concepto de gasto utilizado para los cálculos. Estos autores emplearon tres cifras de gasto: las propuestas de la oficina presupuestaria de la administración estadounidense, las asignaciones presupuestarias votadas por el Congreso, y aprobadas por el Presidente, y el gasto final hecho o gasto liquidado. Al utilizar los datos de éste, la sanidad no resultó perjudicada por el gasto militar, lo contrario de lo que ocurrió cuando hicieron los cálculos con las cifras propuestas de la oficina presupuestaria.

3. Repercusiones de la Defensa en la economía y el gasto público en educación en España

La financiación de la defensa puede tener repercusiones directas o indirectas en la asignación de recursos a programas sociales. En el primer caso, los incrementos del gasto militar podrían originar minoraciones del social porque asignar más recursos a defensa puede reducir los empleados en el gasto social. En el segundo, los recursos empleados en la defensa podría limitar la cuantía de los asignados a los capítulos sociales a través del impacto que el gasto militar genera en la inversión y el crecimiento. Este enfoque indirecto presupone que existen algunos factores que difieren los efectos del gasto militar, lo que requiere explorar las relaciones entre el coste de la defensa, la cuantía de la inversión, la evolución de la economía y el gasto social o el de algunos de sus componentes esenciales, caso de la sanidad, la educación y las pensiones. Al

examen de la compleja relación entre el gasto militar y la economía se ha dedicado una extensa bibliografía que no proporciona conclusiones aplicables a todos los países en todos los tiempos. La defensa puede impulsar la demanda y reducir el desempleo a corto plazo, pero es probable que a largo plazo perjudique la inversión y el crecimiento. El efecto económico del gasto militar varía tanto si se analiza desde enfoques de oferta del tipo de la función de producción y las interrelaciones sectoriales como desde la perspectiva keynesiana de la demanda agregada. En algunos estudios se defiende que la defensa estimula el crecimiento porque potencia la demanda agregada, financia la industria pesada y las infraestructuras, genera empleo, mejora el capital humano y tecnológico, crea las condiciones necesarias de seguridad y estabilidad para la confianza del inversor, además de ser una herramienta contracíclica del capitalismo que reduce el desempleo e incrementa los beneficios del sector privado, especialmente del monopolista². En otras investigaciones las conclusiones son opuestas, poniéndose el acento en que el gasto militar inhibe el crecimiento al reducir la inversión, limitar las asignaciones a I+D e incrementar la burocracia³. Que gastos elevados en defensa ahogan la inversión y/o la desvían de los fines productivos parece deberse a que el consumo público y el privado no militar suponen más de la mitad de la economía y son muy resistentes a la reducción, con lo que la defensa compite con la inversión por la parte que no es consumo de la capacidad productiva total. Además, la inversión y el gasto militar no empleado en pagar al personal se dirigen esencialmente a las mismas industrias, por lo que una creciente demanda de defensa puede generar cuellos de botella en la oferta que disminuyan la inversión. Gastos crecientes en el área militar pueden también conllevar mayores impuestos o más préstamos gubernamentales, absorbiendo fondos que podrían haberse asignado a la inversión⁴.

La ausencia de consenso académico sobre los efectos económicos del gasto militar no impide que exista una conclusión predominante, la de que las cargas de la defensa no tienen un impacto significativo en el crecimiento, siendo en cualquier caso más perjudicial que beneficioso. Así, para Chan (1987, p. 39), “las pruebas disponibles no son completamente concluyentes, pero en general no respaldan la idea de que el gasto militar fomente el crecimiento económico”. Por su parte, Ram (1995) encontró

² Véase McNair, Murdoch y Sandler (1995), Heo (1999), Baran y Sweezy (1966), O'Connor (1973) y Griffin, Devine y Wallace (1982).

³ Chan (1987), Huisken (1982), Mosley (1985) y Rasler y Thompson (1988)

⁴ Véanse, entre otros, los trabajos de Cappelen, Gleditsch y Bjerkholt (1984), Denoon (1986), (1983), Lindgren (1984), Smith (1980), Smith y Georgiu (1983) y De Grasse, McGuinness y Ragen (1983)

pocas evidencias de que la financiación de la defensa tuviera efectos, positivos o negativos, en el crecimiento tras revisar 29 estudios sobre la relación entre uno y otro. Dunne (1996) examinó 54 trabajos y halló que el gasto militar no tenía, en el mejor de los casos, ninguna consecuencia sobre el crecimiento y era probable que las tuviera negativas. Dunne y Uye (2009) analizaron 103 obras sobre la relación defensa-crecimiento y encontraron que el 43 por 100 de ellas no proporcionaba resultados claros, un 37 por 100 se inclinaba por impactos negativos de la primera en el segundo y un 20 por 100 hallaba impactos positivos. Por último, Dunne y Nikoladiou (2012) concluyeron que el gasto militar tuvo una repercusión más bien negativa -o neutra, en el mejor de los casos- en las economías de la Unión Europea de los 15 entre 1961 y 2007. Parece que el gasto militar, pese a que puede estimular el empleo a corto plazo, tiende a crear un grave desempleo estructural por los efectos de un crecimiento económico más lento, una menor inversión, una demanda del consumidor más débil y una competitividad exportadora declinante. Una voluminosa y sostenida desviación de capital y recursos humanos desde los sectores exportadores a los de la defensa podría conducir a un menor aumento de las exportaciones, generando una balanza de pagos crecientemente desfavorable. El gasto militar puede ser también una fuente importante de inflación de costes que es perjudicial por minar la competitividad exterior e impulsar el consumo y el crédito a expensas de los ahorros y la inversión, lo que a su vez podría ralentizar el crecimiento económico. Tales impactos pueden ser mitigados o ampliados por factores circunstanciales. Por ejemplo, si la capacidad productiva está siendo totalmente utilizada un gasto militar adicional puede agravar embotellamientos en ciertas industrias y desviar recursos de la producción civil. Podría ocurrir también que en aquellos países con una corriente notable de inversión y/o ayuda procedente del exterior sus recursos domésticos podrían ser reasignados, aligerando sus cargas militares y paliando sus efectos económicos negativos. Por último, si el gasto en defensa se financia con déficits presupuestarios o impuestos más elevados, la tasa de inflación y la propensión a ahorrar resultarán afectadas⁵. El efecto multiplicador del gasto en defensa también parece incidir en su dimensión económica negativa. Entre 1905 y 1980, en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Japón y República Federal de Alemania los multiplicadores del gasto militar, excluidas las grandes guerras, oscilaron entre el -0,60 y el 0,028. En este margen se incluiría el multiplicador de países de renta variada (-0,19)

⁵ Chan (1987). Chan y Mintz (1992)

y de países en vías de desarrollo (-0,11/-0,27)⁶. Las estimaciones son menos negativas si se incluyen los grandes conflictos y llegan a ser positivas en situaciones de elevado desempleo. Por ejemplo, durante las dos guerras mundiales y los conflictos de Corea y Vietnam, el efecto multiplicador de la defensa estadounidense fue del 0,8, mientras que osciló entre el 0,6 y el 0,7 en periodos como el de 1917- 2006, en el que se sucedieron etapas de paz y de guerra. El multiplicador fue del 0,67 en 1939, cuando había una tasa de desempleo del 5,6 por 100, pero pudo llegar al 1,0 en los periodos en que alcanzó el 12 por 100, con lo que los efectos económicos del gasto militar compensarían el dinero desviado de la inversión⁷.

Al contrario que en las relaciones entre la defensa y la economía, existe un amplio consenso académico sobre los vínculos entre la inversión y el crecimiento, por un lado, y entre éste y los gastos sociales, por otro. La inversión, sea pública o privada, se tiene por una variable fundamental del crecimiento, ya que garantiza la renovación y expansión del stock de capital existente e incrementa la velocidad de difusión del progreso técnico y la innovación⁸. Por su parte, la relación entre el crecimiento económico y los gastos sociales –en educación, sanidad y otros- es positiva en el sentido de que el primero impulsa el segundo. Parece que el crecimiento fomenta el aumento de todos los gastos públicos, no sólo los sociales, respaldando la ley de Wagner, al menos en los países desarrollados y en vías de desarrollo⁹. De ahí que aquellas naciones con elevadas tasas de crecimiento suelen generar un excedente suficiente para favorecer la acumulación de capital humano mediante el aumento del gasto en educación, mientras que aquellas que crecen menos probablemente no podrían permitírselo¹⁰.

El estudio del caso español durante la segunda mitad del siglo XX revela la complejidad que caracteriza las relaciones entre la defensa, la economía y los gastos sociales. El gasto militar y la riqueza nacional experimentaron incrementos absolutos

⁶ Nardinelli y Ackerman (1976). Deger y Sen (1983). Para Deger y Smith (1983, p. 346), los multiplicadores en los países en desarrollo vendrían a demostrar que el efecto negativo del gasto militar en el ahorro y la inversión supera el impacto negativo de la modernización y la tecnología generados por la defensa en la tasa de crecimiento.

⁷ Barro y Redlick (2011).

⁸ Véase, por ejemplo, Solow (1988), Ram (1986), Galbraith (1958), Denison (1985), Aschauer (1989), Barro (1990).

⁹ Dritsakis (2004). Akitoby et alii (2006). Guerrero y Elliott (2007).Díaz-Fuentes y Revuelta (2013) avalan el cumplimiento de la ley de Wagner en España durante el periodo 1850-2000.

¹⁰ Véase, por ejemplo, Deger (1986).

considerables, mucho mayor el de la segunda que el del primero. El valor anual medio del PIB en términos reales era en el decenio de 1990 casi 7 veces mayor de lo que lo había sido en la década de 1950 y el de la inversión más de 10, mientras que el coste de la defensa se habría duplicado (cuadro 1). El PIB aumentó durante casi todo el periodo, especialmente a partir de la década de 1960, mientras que la inversión creció hasta mediados del decenio de 1970, se estancó o decreció hasta mediados del de 1980 y aumentó durante el resto del periodo o la mayor parte de él. Por su parte, el coste de la defensa siguió una tendencia al alza, con oscilaciones, hasta finales del decenio de 1980, se redujo a continuación hasta mediados del siguiente y se mantuvo más o menos constante durante el resto del periodo (gráficos 1, 2 y 3). Si la comparación se hace en términos per cápita, las diferencias aumentan considerablemente. El PIB y la inversión se incrementaron en más de un 600 por 100, mientras que el gasto militar aumentó un 25 por 100. Además, la defensa como porcentaje del gasto del Estado y del PIB declinó mucho entre 1950 y 2000, pasando de suponer un 4% de la riqueza nacional a algo más del 1% (cuadro 1). Estos datos indicarían que, en el conjunto de dicho periodo, el impacto de la defensa en el crecimiento económico no debió de ser muy negativo, si se acepta la hipótesis, antes explicada, de la existencia de relaciones negativas entre los incrementos del gasto militar la inversión y el crecimiento.

No obstante, la inversión y el crecimiento pudieron resentirse en aquellos subperiodos en los que el coste de la defensa creció mucho y supuso elevados porcentajes del gasto del Estado y la renta nacional. Por ejemplo, el gasto militar anual medio experimentó un incremento, en precios constantes, del 34 por 100 en el decenio de 1950, periodo en el que supuso un 28 por 100 del gasto del Estado y un 4 por 100 del PIB. Que España se mantuviera aislada de la economía internacional en tal decenio influyó probablemente en que el gasto militar creciera mucho y elevara su peso en el PIB¹¹. El aumento del coste de la defensa fue aún mayor en la década de 1960 (un 41 por 100), pero sus ratios respecto al gasto del Estado y la riqueza nacional se redujeron considerablemente, aunque seguían siendo muy elevadas (el 16 y el 3 por 100, respectivamente) (cuadro 1). Los elevados porcentajes de recursos empleados por el Estado en fines militares pudieron deberse al subdesarrollo del sector público durante el

¹¹ Para la relación existente entre el coste de la defensa y el grado de apertura, Dunne, Nikolaidou y Mylonidis (2003).

régimen franquista¹², lo que originó dos fenómenos aparentemente contradictorios. Por un lado, impidió que los recursos asignados al área militar aumentaran a la misma tasa que en otros países, mientras que, por otro, la defensa absorbió una elevada proporción de fondos públicos¹³. En los decenios siguientes, excepto el de 1990, la cuantía absoluta del gasto militar siguió creciendo, aunque menos que en los anteriores, y, lo que es más importante, el peso de la defensa en el presupuesto y la economía nacional cayeron extraordinariamente, hasta menos del 4 por 100 del primero y algo más del 1 por 100 de la segunda. Estos datos apuntan a que la repercusión económica negativa del gasto militar debió de ser mucho mayor en los primeros dos decenios del periodo estudiado que en los siguientes. No parece descabellado pensar que el crecimiento de la economía española podría haberse acercado más a su potencial, al menos entre 1950 y 1970, si el gasto militar hubiera sido menor, ya que ello habría hecho posible una inversión mayor. Previsiblemente, durante este periodo el efecto expulsión de la inversión generado por una defensa más costosa se habría sumado a los factores generales que menguaron el crecimiento durante la dictadura franquista. Entre ellos han de contarse los grandes obstáculos generados por el modelo autárquico, la versión suavizada del mismo que imperó en la segunda mitad de la década de 1950 y, en menor medida, los mecanismos intervencionistas y proteccionistas que pervivieron o, como los Planes de Desarrollo, surgieron tras el Plan de Estabilización.

La evolución de la economía y la del gasto en educación en la España de la segunda mitad del siglo XX parecen avalar la relación positiva entre ambas variables: cuando aumentó la renta nacional también crecieron todos los gastos públicos, incluido el educativo, con la particularidad destacada de que el incremento de éste fue mucho mayor que el del PIB. El valor anual medio en términos reales del gasto público en educación en el decenio de 1990 habría sido casi 22 veces mayor que en el de 1950, multiplicando por más de tres veces su peso en el PIB entre ambas décadas. Si en la década de 1950 superaba en algo el 1 por 100 del PIB, en la de 1970 casi alcanzó el 3 por 100, sobrepasando este porcentaje en la de 1980 y el 4 por 100 en la de 1990. En

¹² El gasto del Estado en el decenio de 1950 fue algo menor, en porcentaje del PIB, que el de principios de la centuria y cinco puntos porcentuales inferior al de 1930, datos que revelarían que la dictadura frenó el desarrollo del sector público (Comín y Díaz, 2005).

¹³ Herranz, Sabaté y Galofré-Vilà (2011). No ha de olvidarse tampoco que España sólo participó en un conflicto bélico, la guerra de Ifni, durante los pocos meses que transcurrieron entre el otoño de 1957 y la primavera de 1958

términos per cápita, el crecimiento del gasto público en educación fue superior al 600 por 100, algo menor que el del PIB y la inversión. El gasto en educación aumentó ininterrumpidamente desde mediados del decenio de 1960 hasta 1978. Después se estancó durante tres años y se redujo en la primera mitad del decenio de 1980, seguramente como consecuencia de la segunda crisis del petróleo y de los ajustes de gasto público llevados a cabo para combatirla. Por último, experimentó un gran incremento a partir de 1987, coincidiendo con la recuperación económica que siguió al ingreso de España en la CEE y el traspaso de las competencias educativas a las Comunidades Autónomas (gráfico 4). Que el gasto en educación aumentara extraordinariamente entre el primero y el último decenio del periodo estudiado refleja el gran esfuerzo hecho por la sociedad española, especialmente en las últimas décadas del siglo XX, en pro de la educación. También se explica por la bajísima cuantía de todos los gastos sociales durante los decenios posteriores a la guerra civil. El empleo de recursos crecientemente cuantiosos en la educación originaría que ésta “devolviera” al crecimiento lo que éste había hecho posible asignar a la educación, poniendo de relieve que la relación entre ambas variables fue bidireccional. Parece que el crecimiento económico y el capital humano se refuerzan el uno al otro, generando la educación crecimiento, el cual, a su vez, eleva la demanda de educación, por lo que cualquier medida que aumente la riqueza conducirá a un nivel educativo superior, lo que incrementará la renta en la siguiente generación. El gasto educativo estaría correlacionado positivamente con la tasa de crecimiento del PIB por el aumento de productividad que supone la generación de capital humano¹⁴. Ello se percibe, por ejemplo, en la cuantía de los salarios, que serían mayores cuantos más años de formación reciba una población dada. Se ha estimado que casi tres cuartas partes de la variación de las tasas de crecimiento económico entre países se deben a los ingresos iniciales y al nivel de la educación¹⁵.

La relación positiva entre la renta y la educación debió de producirse en España a partir del decenio de 1960, cuando empezaría a corregirse el empobrecimiento del capital humano generado por el sistema educativo del primer franquismo. Poco a poco se neutralizarían los factores que generaron una pérdida considerable de capital humano

¹⁴ Véanse, por ejemplo, Jones (1990), Barro (1991), Hansson y Henrekson (1994) y Glewwe y Jacoby (2004)

¹⁵ Hanushek y Woessmann (2010)

durante las dos décadas anteriores, lo que ayuda a explicar por qué ese periodo fue de caída o estancamiento económico. Entre tales factores habría que contar la reducción del tiempo de escolarización y la emigración forzosa, por razones políticas, de intelectuales y profesores. Entre 1960 y 2000, cada año adicional de educación estuvo asociado con un aumento del PIB per cápita de casi un 20 por 100, especialmente tras llegada de la democracia, cuando se modernizó el sistema educativo español y aumentó la influencia de la educación en el crecimiento económico. La educación se convirtió en una máquina del crecimiento, como había ocurrido antes en los países de la OCDE, rompiendo con una tradición de atraso educativo de cien años que tuvo graves repercusiones negativas en la evolución económica¹⁶.

4. El “dividendo de la paz” y sus beneficios sociales en la España de la segunda mitad del siglo XX

El “dividendo de la paz” es un concepto surgido tras el fin de la Guerra Fría con el que se pretende poner de relieve los beneficios económicos y sociales generados por la reducción del gasto militar. Se supone que el menor coste de la defensa que suele producirse tras la conclusión de los conflictos bélicos libera recursos asignables a potenciar el crecimiento y/o los programas sociales. En los Estados Unidos del periodo 1953-1987, por ejemplo, parece que el dividendo conseguido adoptó la forma de crecimiento económico, el que se produjo por el aumento de la inversión que siguió al menor coste de la defensa cinco años después de que finalizara la guerra de Corea¹⁷. En la Noruega de los quinquenios siguientes a 1990 se habrían generado efectos económicos y sociales muy positivos si el gasto militar se hubiera reducido. Se previó que los beneficios variarían en función de si las sumas ahorradas en defensa se destinaban a financiar los gastos sociales principales o a reducir el impuesto sobre la renta. En el primer caso, si aquellos se incrementaran en una cuantía similar a la rebaja del gasto militar, la ocupación y las compras de bienes y servicios aumentarían, con lo que se produciría un impacto directo positivo en la demanda de trabajo y, por tanto, se reduciría el desempleo. Un empleo creciente aumentaría el ingreso familiar, el consumo privado y la inversión en vivienda. Como el desempleo seguiría reduciéndose, los salarios crecerían. Esto conduciría a precios más elevados pero menores que los

¹⁶ Camps (2013)

¹⁷ Mintz y Huang (1990)

salarios, con lo que el salario real seguiría aumentando y el consumo también. La pérdida de competitividad por los costes crecientes llevaría a unas menores exportaciones y producción manufacturera, pero la balanza por cuenta corriente mejoraría debido a que el volumen de las importaciones sería menor. Por otra parte, el equilibrio presupuestario, medido por las necesidades de financiación del sector público, resultaría reforzado principalmente por el aumento en el empleo y los salarios, ya que la mayor parte del ingreso fiscal procede de impuestos sobre los costes laborales, la renta y el valor añadido. Así que parece razonable que, al menos en el corto y medio plazo, se reduciría el déficit. Si se optara por rebajar el impuesto sobre la renta, el resultado sería un aumento en el consumo privado noruego en moneda constante, aunque algo menor que en el caso anterior, ya que parte de la reducción impositiva se destinaría al ahorro familiar. La reducción tributaria originaría una minoración en el salario real antes de impuestos más pequeño que la rebaja fiscal, con lo que los salarios reales después de impuestos aumentarían. Esto tendría repercusiones en el mercado de trabajo: la oferta de trabajo aumentaría, así que el incremento en el empleo sería mayor que la reducción del desempleo. Ello generaría efectos positivos oferta-demanda por la existencia de unos tipos impositivos más pequeños. Pero, el equilibrio presupuestario se deterioraría pese a la reducción del gasto militar. La caída del salario antes de impuestos se reduciría en el largo plazo porque un desempleo menor aumentaría los salarios. Esto también aminoraría los efectos positivos sobre las exportaciones¹⁸. Parece que el dividendo económico de la paz se produce a largo plazo. Entre 1950 y 1985, en 93 de 103 países de todo el mundo el crecimiento de la economía generado por la reducción del coste de la defensa se habría producido en el largo plazo, mientras que sólo en los 10 restantes el impacto económico positivo se habría producido a corto plazo (Mintz y Stevenson, 1995).

La evolución de la economía, el coste de la defensa y el gasto social parecen avalar que en la España de la segunda mitad del siglo XX, especialmente a partir del establecimiento de la democracia, se habría producido un dividendo de la paz al estilo del que se dio en otros países. Todos los gastos públicos, militares o civiles, crecieron en términos absolutos, pero el incremento de los primeros fue muy inferior al de los segundos en el conjunto del periodo 1950-2000, especialmente a partir del decenio de 1970 (compárese, en el cuadro 2, la tasa acumulativa de la defensa con la del gasto

¹⁸ Cappelen, Gleditsch y Bjerkholt (1992). Véase también Gleditsch et alii (1996)

social o la de cualquiera de sus componentes). Probablemente, los considerables incrementos del déficit y la deuda -el primero se multiplicó por 65, la segunda lo hizo por 7 (cuadro 3, gráficos 7 y 8)- posibilitaron el aumento de las cuantías absolutas de los capítulos sociales y militares. Gracias a la captación de cuantiosos ingresos financieros, el Estado español habría podido conseguir que los aumentos de algunos capítulos presupuestarios, especialmente los sociales, no se hicieran a expensas de otros, sociales o no. Quizá los gobiernos pudieron evitar el juego de suma-cero de las relaciones de sustitución presupuestarias incurriendo en gasto deficitario. El acrecentamiento del tamaño de la tarta de los recursos públicos resultante pudo haber evitado reducciones en algunos capítulos de gasto, aunque parece que, incluso en las fases de expansión del gasto, siempre habrá capítulos que consigan más fondos que otros. Por ejemplo, el aumento de la cuantía del gasto social no fue probablemente tan grande como podría haber sido si el incremento del militar hubiera sido menor, especialmente durante la dictadura de Franco, cuando la escasez de servicios sociales era manifiesta. Parece obvio, con todo, que recurrir a los préstamos puede ser un mecanismo que permita gestionar mejor la distribución de los fondos. En un presupuesto equilibrado el deseo de incrementar algunos gastos debió hacer más difícil evitar reducciones en otros, mientras que en uno desequilibrado, si se consigue financiar el déficit, se podrán diferir tales decisiones a presupuestos futuros. En otras palabras, si se tiene acceso al crédito puede gastarse más en defensa (o bienestar social) sin tener que gastar menos en programas sociales (o defensa).

La magnitud del dividendo varía según el instrumento de medición elegido, pero en todos los casos el gasto social aumentó considerablemente, tanto en términos absolutos como en relación con el gasto del Estado o la riqueza nacional, mientras que el coste de la defensa declinó en relación con estas dos variables y creció mucho menos en términos absolutos. En el decenio de 1950 la defensa se llevaba más de un cuarto del gasto estatal, un porcentaje superior al destinado en los programas sociales (más de un quinto). Cincuenta años más tarde, en la década de 1990, el peso del primero se había reducido casi siete veces y el del segundo habría aumentado hasta suponer casi dos quintos del gasto del Estado. Este incremento es achacable, en gran medida, a la extraordinaria expansión de la sanidad, que multiplicó por 13 su participación en el gasto del Estado, y a la más moderada de la educación y de las pensiones, seguridad social y beneficencia, que casi la duplicaron. El gasto social también presenta una

evolución más favorable que el militar si se considera su peso en el PIB. Las sumas empleadas por el Estado en el primero casi triplicaron su participación en la riqueza nacional entre el decenio de 1950 y el de 1990, mientras que las destinadas a la defensa se redujeron en cuatro veces, lo que originó que el gasto social tuviera en el decenio de 1990 diez veces más peso en el PIB que la defensa (para la evolución de los gastos sociales más importantes, véanse gráficos 4, 5 y 6). La explicación de esta transformación fundamental reside en que la sanidad multiplicó por veinte su participación en la riqueza nacional, mientras que la educación y las pensiones, la seguridad social y la beneficencia la multiplicaron por más de tres. El enorme crecimiento del gasto social, especialmente el hecho en sanidad, tiene que ver también con el bajísimo nivel que tuvo durante el régimen de Franco (cuadro 2).

El cálculo de los porcentajes de participación en el gasto total y el PIB tiene la ventaja de que no varían con las magnitudes absolutas, siempre que la participación de cada capítulo en ambas variables se mantenga en el mismo nivel. Pero conlleva el inconveniente de que no permite observar fácilmente las fluctuaciones interanuales porque los porcentajes se calculan independientemente de un año para el siguiente. Por ello se ha recurrido frecuentemente a otra medida, la variación porcentual anual, con la que se estima cuánto varía la asignación a un capítulo presupuestario en un año determinado respecto al anterior. La realización de este cálculo se justifica porque la asignación de recursos se centra casi totalmente en los cambios marginales, fraguándose las decisiones que importan en términos de variaciones anuales de las cuantías totales¹⁹. La variación porcentual anual también proporciona el resultado de que el gasto social experimentó un incremento muchísimo mayor que el militar. Entre los decenios de 1950 y 1990 casi todos los capítulos presupuestarios registraron incrementos medios considerables en sus cuantías absolutas, pero los del gasto social y sus componentes principales, excepto la vivienda, son muchísimo mayores que el de la defensa. Mientras el incremento del coste de ésta fue superior a los dos tercios, el del gasto social del Estado fue 20 veces mayor, el de la sanidad casi 200 veces, el de la educación, 30, y el de las pensiones, seguridad social y beneficencia, 28.

¹⁹Esta medida se ha utilizado habitualmente entre los estudiosos del dilema cañones-mantequilla. Véanse, por ejemplo, lo de Caputo (1975) y Domke, Eichenberg y Kelleher (1983).

La variación porcentual anual es muy sensible a la cuantía de cada capítulo de gasto y no ofrece criterios adecuados para examinar las relaciones entre los capítulos presupuestarios y las variaciones del gasto total. El tamaño de éste no tiene nada que ver con el cálculo de las variaciones porcentuales de capítulos concretos. Por ejemplo, un aumento del gasto social del 10 por 100 no indica cuánto varía su relación con el presupuesto total, pudiendo darse el caso de que, pese a tal incremento, experimente una reducción relativa respecto al gasto total o el PIB. Para superar estos problemas, y captar las dimensiones del corto y largo plazo y la de las partes y el total de la evolución presupuestaria, también se ha estimado el porcentaje de los incrementos en relación con el porcentaje de los totales existentes (*share of increments*). Esta medida permite evaluar la magnitud de los incrementos de los capítulos de gasto en términos de su participación en el total anual del presupuesto o de la renta nacional, permitiendo, además, ajustar el tamaño desigual de aquéllos²⁰. La estimación del porcentaje de los incrementos arroja el resultado de que en España todos los gastos sociales, excepto la vivienda, experimentaron, entre 1950 y 2000, aumentos sustanciales respecto a su participación en el gasto total y el PIB, destacadamente la sanidad, mientras que los incrementos del gasto militar fueron relativamente pequeños. El coste de la defensa aumentó más del 6 por 100 y el 12 por 100 en relación con el gasto total y el PIB, respectivamente, incrementos muy inferiores a los del gasto social (130 y 242 por 100), la educación (196 y 364), la sanidad (1.290 y 2.381) y las pensiones y la seguridad social (184 y 340).

Como el cálculo del porcentaje de los incrementos también es sensible a la cuantía absoluta de los capítulos presupuestarios, aunque su parte relativa del gasto total no varíe, se ha diseñado otro instrumento para captar las oscilaciones de la asignación presupuestaria. Nos referimos a la variación porcentual relativa (*relative change*)²¹, que mide la diferencia entre la proporción del presupuesto total que supone un capítulo de gasto en un año determinado respecto al anterior, diferencia que se compara, a continuación, con su proporción respecto al presupuesto total en el año primero. Así,

²⁰ $SI_i = \frac{(X_{i,t} - X_{i,t-1}) / (T_t - T_{t-1})}{X_{i,t-1} / T_{t-1}} \times 100$, donde $X_{i,t}$ es el presupuesto para el capítulo i en el año t y T_t es el presupuesto total en el año t (Gist, 1982).

²¹ $SP_i = \frac{X_{i,t} / T_t - X_{i,t-1} / T_{t-1}}{X_{i,t-1} / T_{t-1}} \times 100$ (Mok y Duval, 1992)

estas dos operaciones incorporan las variaciones en su dimensión de largo plazo (porcentaje proporcional) y de corto plazo (variación porcentual). Esta medida ajusta la variación porcentual teniendo en cuenta el presupuesto base cuando se calculan las oscilaciones de los capítulos presupuestarios, ofreciendo las magnitudes de los incrementos o decrementos marginales en términos de su participación en las variaciones porcentuales respecto a los totales existentes. El cálculo de la variación porcentual relativa proporciona también resultados favorables al gasto social y a sus componentes principales en la España de la segunda mitad del siglo XX, si, como ha ocurrido en los casos anteriores, se exceptúa la vivienda. Mientras que el peso de la defensa en el gasto del Estado y el PIB experimentó un retroceso considerable (más de cuatro quintos y tres cuartos, respectivamente), el gasto social registró una evolución de signo contrario, de mayor envergadura en el caso de su participación en el PIB (más de un cuarto y más del doble, respectivamente). El mayor incremento se produjo, de nuevo, en la sanidad, que multiplicó su peso por más de 10 y 17 veces, respectivamente, siendo bastante menor, pero elevado, en la educación y las pensiones, la seguridad social y la beneficencia (cuadro 2)

El dividendo de la paz que reflejan estos datos se produjo esencialmente a partir de la instauración de la democracia, como pone de relieve la comparación entre los resultados estimados para los años de la cronología estudiada correspondientes a la dictadura de Franco (1950-1975) y los de la democracia y la transición a ella (1976-2000). Entre uno y otro periodo, el peso de la defensa respecto al gasto del Estado y la riqueza nacional se redujo tres y dos veces, respectivamente, mientras que el del gasto social se incrementó, multiplicándose por cinco veces en el caso del PIB. Si se calcula la variación porcentual anual, tanto el gasto militar como el social experimentaron incrementos, pero el del segundo fue diez veces mayor que el del primero, destacando el de la sanidad, que se multiplicó por 38. Hallando el porcentaje de los incrementos, la defensa aumentó su participación en el gasto del Estado y el PIB muy ligeramente (más del 13 y el 25 por 100, respectivamente) en comparación con las 17 veces más en que incrementó su peso el gasto social. Por último, estimando la variación relativa, el gasto militar redujo más de tres quintos y más de dos quintos su participación en el gasto del Estado y la renta nacional, respectivamente, entre el periodo de la dictadura y el de la democracia, mientras que el gasto social siguió la tendencia contraria, incrementado su peso en el PIB en más de un 70%. La magnitud del dividendo de la paz durante el

periodo democrático se percibe nítidamente en el gran aumento que experimentó la participación de los diversos gastos sociales, especialmente los bienes preferentes, en el gasto público y la riqueza nacional en relación con los años del régimen de Franco. La sanidad fue el que más incrementó su participación (82 y 12 veces, respectivamente), seguidas de las pensiones y la seguridad social (un tercio y el doble) y la educación (más del doble y un 2 por 100) (cuadro 2). De estos incrementos habría que exceptuar de nuevo la vivienda²².

5. Conclusiones

La cuantía absoluta de los capítulos presupuestarios aumentó considerablemente en la España de la segunda mitad del siglo XX, aunque fue mucho mayor el incremento de los de carácter social que el de los militares. En relación con el gasto del Estado y la riqueza nacional, la defensa y el gasto social experimentaron trayectorias divergentes. Si la primera sufrió un agudo declive, el segundo experimentó un vigoroso impulso. De ello se infiere que, en el conjunto del periodo estudiado, el gasto militar no debió de perjudicar excesivamente al crecimiento, vía reducción de la inversión, ni a la capacidad de los gobiernos de asignar recursos a los programas sociales. No obstante, la inversión, la economía y el gasto social debieron de resultar mermados en aquellos sub-periodos en que se produjeron grandes aumentos del gasto militar. En el decenio de 1950 y, en menor medida, en el de 1960, por ejemplo, el coste de la defensa aumentó considerablemente, suponiendo notables porcentajes del gasto del Estado y el PIB, lo que impediría, si convenimos que el gasto militar aminora a la inversión, que la economía española alcanzara su potencial de crecimiento y, por tanto, se asignaran recursos suficientes a los programas sociales. La escasez o inexistencia de servicios sociales públicos durante el franquismo, especialmente en sus primeras décadas, al tiempo que se producía un elevado gasto militar debió afectar adversamente al ingreso de los estratos más pobres de la población, ampliándose, por tanto, las diferencias sociales.

²² El porcentaje de recursos públicos que el Estado destinados a la vivienda cayó en 1976-2000 respecto a 1950-1975 en términos relativos por varios factores: el gran aumento del gasto del Estado, el que la financiación de la vivienda pasara a proporcionarla el sistema financiero, en lugar de depender tanto del Estado, y el que en las series disponibles no se incluyen las desgravaciones fiscales ni, en los últimos años de la cronología estudiada, las sumas asignadas a la vivienda por las Comunidades Autónomas. Para un examen de estos aspectos, véase González Páramo y Onrubia (1992). Para la política de vivienda, Fernández Carbajal (2003 y 2004).

En la España de la segunda mitad del siglo, especialmente a partir de la instauración de la democracia, se habría producido un dividendo de la paz al estilo del ocurrido en otros países. Sea cual sea el instrumento de medición utilizado para estimarlo, entre el periodo de la dictadura franquista (1950-1975) y el de la democracia y la transición a ella (1976-2000) la defensa vio reducido notablemente su peso en el gasto del Estado y la riqueza nacional, mientras que el gasto social y casi todos sus componentes, especialmente la sanidad, lo incrementaron de manera extraordinaria. En el caso de los recursos destinados a los servicios educativos y sanitarios, ello debió impulsar el crecimiento, dada la relación positiva que la mejora de la formación y la salud de la población tienen en la evolución de la renta nacional. La reducción del coste de la defensa y el gran incremento del gasto social entre ambos periodos también pone de relieve el gran esfuerzo hecho por la sociedad española para superar la pobreza herencia en servicios sociales dejada por el franquismo, más aún si se considera que, al menos durante los primeros años de la democracia, se hizo en condiciones económicas, presupuestarias y demográficas adversas. Estas páginas se han escrito esencialmente para presentar un tema de investigación que relevante para la historia económica, la economía pública y la economía de la defensa. No cabe duda de que su importancia impulsará esfuerzos adicionales en las investigaciones futuras que mejoren los resultados presentados en ésta.

Bibliografía

Akitoby et alii (2006), “Public Spending, voracity, and Wagner’s Law in developing countries”, *European Journal of Political Economy*, 22, pp. 908-924

Aschauer, D.A. (1989): “Is Public Expenditure Productive?”, *Journal of Monetary Economics*, 24, pp. 171-188

Auerbach, A. y Gorodnichenko, Y. (2012), “Fiscal Multipliers in Recession and Expansion”, en A. Alesina y F. Giavazzi, eds., *Fiscal Policy After the Financial Crisis*, Chicago, Chicago University Press, pp. 63-102

Baran, P.A. y Sweezy, P.M. (1966), *Monopoly Capital*, Nueva York, Monthly Review Press

Barro, R. J. (1990): “Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth”, *Journal of Political Economy*, 5, pp. S103-S125

Barro, R.J. (1991), “Economic Growth in a cross section of countries”, *Quarterly Journal of Economics*, 106, pp. 407-443

Barro, R.J. y Redlick, Ch. J. (2011), “Macroeconomic Effects from Government Purchases and Taxes”, *Quarterly Journal of Economics*, 126, 1, pp. 51-102.

Berry, W. y Lowery, D. (1990), “An Alternative Approach to Understanding Budgetary Tradeoffs”, *American Journal of Political Science*, 34: 671-705

Camps, E. (2013), “The Impact of Investment in Education on Economic Development: Spain in Comparative Perspective, 1860-2000”, *Working Papers 1373*, Pompeu Fabra University, pp. 1-19

Cappelen, A., Gleditsch, N.P. y Bjerkholt, (1984), “Military Spending and Economic Growth in the OECD Countries”, *Journal of Peace Research*, 21: 361-373

Cappelen, A. Gleditsch, N.P. y Bjerkholt, O. (1992): “Guns, butter, and growth: the case of Norway”, en S. Chan y A. Mintz, eds.: *Defense, Welfare, and Growth. Perspectives and Evidence*, London and New York, Routledge, pp. 61-80

Caputo, D. (1975), “New perspectives on the public policy implications of defense and welfare expenditures”, *Policy Science*, 6: 423-446

Clayton, J.L. (1976), “The Fiscal Limits of the Warfare-Welfare State: Defense and Welfare Spending in the United States since 1900”, *Western Political Quarterly*, 29: 364-383

Chan, S. (1985), “The Impact of Defense Spending on Economic Performance: A Survey of Evidence and Problems”, *Orbis*, 29: 403-434

- Chan, S. (1987), "Military Expenditures and Economic Performance", in *World Military Expenditures and Arms Transfers*, Washington DC: U.S. Arms Control and Disarmament Agency
- Chan, S. y Mintz, A., eds. (1992), *Defense, welfare, and growth*, London, Routledge
- Comín, F. y Díaz, D. (2005), "Sector público administrativo y estado del bienestar" en A. Carreras y X. Tafunell (coord.), *Estadísticas históricas de España siglos XIX-XX*, Bilbao, Fundación BBVA, pp. 873-964
- Cubel, A. y Palafox, J. (2002), "El stock de capital productivo de la economía española, 1900-1990", WP-EC, 6, Valencia, Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas
- Cuentas de las Administraciones Públicas*, Madrid, Ministerio de Hacienda e IGAE, 1958-2000
- De Grasse, R.W., McGuinness, E. y Ragen, W (1983), *Military Expansion, Economic Decline*, New York, Council on Economic Priorities
- Deger, S. (1986), *Military Expenditures in Third World Countries: The Economic Effects*, Londres, Routledge & Kegan Paul
- Deger, S. y Sen, S. (1983), "Military expenditure, spin-off and economic development", *Journal of Development Economics*, 1983, 13, pp. 67-83
- Deger, S y Smith, R. (1983): "Military Expenditure and growth in less developed countries", *Journal of Conflict Resolution*, 27, pp. 335-353.
- Denison, E. (1985): *Trends in American Economic Growth, 1929-1982*, Washington D.C.
- Denoon, D.B., ed. (1986), *Constraints on Strategy: the economics of Western security*, Washington, Pergamon-Brassey
- Díaz-Fuentes, D. y Revuelta, J. (2013), "La relación a largo plazo entre crecimiento económico y gasto público en España (1850-2000)", *Investigaciones de Historia Económica*, 9, pp. 32-42
- Domke, W., Eichenberg, R. y Kelleher, C. (1983), "The illusion of choice: defense and welfare in advanced industrial democracies, 1948-1978", *American Political Science Review*, 77: 19-34
- Dritsakis, N. (2004), "Defense spending and economic growth: An empirical investigation for Greece and Turkey", *Journal of Policy Modeling*, 26, pp. 249-264
- Dunne, J.P. (1996), "Economic effects of military spending in developing countries: a survey", en N.P. Gleditsch *et alii* (eds.), *The Peace Dividend*, Amsterdam: North Holland, 439-464

Dunne, J.P., Nikoladiou, E. y Mylonadis, N. (2003), “The demand for military spending in the peripheral economies of Europe”, *Defence and Peace Economics*, 14, 6, pp. 447-460

Dunne, J.P. y Uye, M. (2009), “Military expenditure and development”, en A. Tan, ed., *The Global Arms Trade*, London: Routledge, 293-305

Dunne, J.P. y Nikolaidou, E. (2012), “Defence Spending and Economic Growth in the EU15”, *Defence and Peace Economics*, 23, 6, pp. 537-548

Fernández Carbajal, A. (2003), “La política de vivienda en España durante el franquismo”, *Estudios territoriales*, 138, 639–653,

Fernández Carbajal, A. (2004), “Veinticinco años de política de vivienda en España (1976-2001): una visión panorámica”, *Tribuna de Economía. Instituto de Comercio Exterior*, 816, pp. 145-161

Galbraith, J.K. (1958): *The Affluent Society*, Boston, Houghton Mifflin Company

Gifford, B. (2006), “Why No Trade-off between ‘Guns and Butter’? Armed Forces and Social Spending in the Advanced Industrial Democracies, 1960-1993”, *American Journal of Sociology*, 2: 473-509

Gist, J. (1982), “Stability and competition in budgetary theory”, *American Political Science Review*, 76, pp. 859-872

Gleditsch, N. P. et al. (1996), *The Peace Dividend*. Amsterdam: Elsevier

Glewwe, P. y Jacoby, H.G. (2004), “Economic growth and the demand for education: is there a wealth effect?”, *Journal of Development Economics*, 74-1, pp. 33-51.

Griffin, L.J., Devine, J.A. y Wallace, M. (1982), “Monopoly Capital, Organized Labor and Military Expenditures: Military Keynesianism in the United States, 1949-1976”, *American Journal of Sociology*, 88, pp. S113-S153

González Páramo, M. y Onrubia, J. (1992), “El gasto público en vivienda en España”, *Hacienda Pública Española*, 120-121, pp. 189-217

Guerrero, F. y Elliott, P. (2007), “The effect of federal government size on long-term economic growth in the United States, 1792-2004”, *UNR Economics Working Paper No 07-002*

Hansson, P. y Henrekson, M. (1994), “A new framework for testing the effect of government spending on growth and productivity”. *Public Choice*, 81, pp. 381–401.

Hanushek, E.A. y Woessmann, L. 2010: “The Economics of International Differences in Educational Achievement”, *IZA Discussion Paper n° 492*, pp. 45-58

Hartman, S.W. (1973), “The Impact of Defense Expenditure on the Domestic American Economy, 1964-1972”, *Public Administration Review*, 33: 379-390

Heo, U. (1999), *The Political Economy of Defense Spending around the World*, Lewiston, New York: Edwin Mellen

Herranz Loncán, A., Sabaté Domingo O. y Galofré-Vilà, G., (2011), “A Long-term Comparative analysis of Spanish military expenditure (1850-2009)”, *ICIP working Papers*, 2011/5

Hollenhorst, J. y Ault, G. (1971), “An Alternative Answer to Who Pays for Defense”, *American Political Science Review*, 65: 760-763

Huisken, R. (1982), “Armaments and Development”, in H. Tuomi y R. Vayrinen (eds.), *Militarization and Arms Production*, New York: St. Martin Press

Jones, B.D (1990), “Public Policies and Economic Growth in the American States”, *Journal of Politics*, 52, pp. 219-33

Jurado Sánchez, J. (2012), “¿Se financió la defensa a costa del gasto social y la economía en el siglo XX? El dilema cañones-mantequilla”, *Hacienda Pública Española*, 203-4, pp. 89-117

Lindgren, G. (1984), “Review Essay: Armaments and Economic Performance in Industrialized Market Economies”, *Journal of Peace Research*, 21: 375-387

McNair, E., Murdoch, C. y Sandler, T. (1995), “Growth and Defense: Pooled Estimates for the NATO Alliance, 1951-1988”, *Southern Economic Journal*, 61, 1: 846-860

Más M., Pérez, F. and Uriel, E. (2003), *El stock de capital en España y su distribución territorial (1964-2000)*, Bilbao, Fundación BBVA

Mintz, A. (1989), “Guns vs Butter: A Disaggregated Analysis”, *American Political Science Review*, 83: 1285-1293

Mintz, A. y Huang, Ch. (1990), “Defense Expenditures, Economic Growth, and the ‘Peace Dividend’”, *American Political Science Review*, 84: 1283-1293

Mintz, A. y Huang, Ch. (1991), “Guns versus Butter: The Indirect Link”, *American Journal of Political Science*, 3: 738-757

Mintz, A. y Stevenson, R.T. (1995), “Defense Expenditures, Economic Growth, and the ‘Peace Dividend’: A Longitudinal Analysis of 103 Countries”, *Journal of Conflict Resolution*, 39-2, pp. 283-305

Mok, J.W. y Duval, R.D. (1992), “Guns, Butter, and Debt: Balancing Spending Tradeoffs between Defense, Social Programs, and Budget Deficits”, en A. Mintz, ed., *The Political Economy of Military Spending in the United States*, New York and London, Routledge, 196-212

Mosley, H. (1985), *The Arms Race: Economic and Social Consequences*, Lexington, MA, Lexington Books

Nardinelli, C. y Ackerman, G.B. (1976), “Defense expenditures and American capitalism: A Note”, *Armed Forces and Society*, 3-1, pp. 13-16

- O'Connor, J. (1973), *The Fiscal Crisis of the State*, Nueva York, St. Martin's Press
- Peroff, K. (1976), "The Warfare-Welfare Tradeoff: Health, Public Aid, and Housing", *Journal of Sociology and Social Welfare*, 4: 366-381
- Peroff, K. y Podolak-Warren, M. (1979), "Does Spending On Defence Cut Spending On Health? A Time-Series Analysis of the U.S. Economy, 1929-1974", *British Journal of Political Science*, 9: 21-39
- Prados de la Escosura, L. (2003), *El progreso económico de España (1850-2000)*, Bilbao, Fundación BBVA
- Pryor, F.L. (1968), *Public Expenditures in Communist and Capitalist Nations*, Londres, G. Allen y Unwin LTD
- Ram, R. (1986), "Government Size and Economic Growth: A New Framework and Some Evidence from Cross-Section and Time-Series Data", *American Economic Review*, 76, pp. 191-203
- Ram, R. (1995), "Defence expenditure and growth", en K. Hartley y T. Sandler, eds., *Handbook of Defense Economics*, Amsterdam, Elsevier, 191-203
- Rasler, K. y Thompson, W.R. (1988), "Defense Burdens, Capital Formation, and Economic Growth", *Journal of Conflict Resolution*, 32, 1: 61-86
- Russett, B.M. (1969), "Who Pays for Defense?", *American Political Science Review*, 63: 412-426
- Russett, B.M. (1970), *What Price Vigilance? The Burdens of National Defense*, New Haven, Yale University Press
- Russett, B.M. (1982), "Defense Expenditures and National Well-being", *American Political Science Review*, 76: 767-777
- Samuelson, P. (1948), *Economics: An Introductory Analysis*, MacGrowth Hill,
- Smith, R.P. (1977), "Military expenditure and capitalism", *Cambridge Journal of Economics*, 1: 61-76
- Smith, R.P. (1980), "Military Expenditures and Investment in OECD Countries, 1954-1973", *Journal of Comparative Economics*, 4: 19-32
- Smith, R.P. y Georgiou, G. (1983), "Assessing the Effect of Military Expenditure on OECD Economics: A Survey", *Arms Control*, 4: 3-15
- Solow, R. (1956): "A contribution to the theory of economic growth", *Quarterly Journal of Economics*, 1, pp. 65-94
- Szymansky, A. (1973), "Military spending and economic stagnation", *American Journal of Sociology*, 79: 1-14

Wilensky, H. (1975), *The welfare state and equality*, Berkeley, University of California Press

Yildirim, J. and Sezgin, S. (2002), Defence, Education and Health Expenditures in Turkey, 1924-96. *Journal of Peace Research*, 39:5, pp. 569-580

Cuadro 1. Inversión, crecimiento económico y gasto en educación, 1950-2000¹

	FBCF	PIBpm	GASTO MILITAR ²			GASTO EDUCACION ³	
1950-1960	1.675	11.203	449,64	27,94	4,05	141,96	1,27
1961-1970	4.713	21.988	633,99	16,35	2,99	390,59	1,78
1971-1980	9.456	40.360	776,99	12,39	1,93	1.129,31	2,80
1981-1990	10.719	54.576	1.050,94	8,28	1,94	1.732,60	3,17
1991-2000	17.143	75.421	909,29	3,92	1,22	3.084,77	4,09
Incrementos per cápita ⁴	658	620	25			609	
R (1950-2000)	2,86	2,41	-1,31			2,57	

¹En miles millones de pesetas a precios constantes. ² Columna izquierda, gasto; columna central, porcentaje respecto al gasto estado; columna derecha, tanto por ciento respecto al PIB. ³Columna izquierda, gasto educativo del Estado, organismos autónomos administrativos, entes preautonómicos y comunidades autónomas; columna derecha, porcentaje respecto al PIB. ⁴Incrementos en tantos por ciento entre el decenio de 1950 y el de 1990. R= tasa acumulativa

FUENTES: Cubel y Palafox (2002), Más, Pérez y Uriel (2003), Prados (2001), Comín y Díaz (2005) y Cuentas de las Administraciones Públicas

Cuadro 2. Gasto militar y gastos sociales (1950-2000)

	DEFENSA	GASTO SOCIAL	EDUCACION ³	SANIDAD	PENSIONES, SEGURIDAD SOCIAL Y B.	VIVIENDA
% Gasto Estado y PIB (1950-1960/1991-2000) ¹	26,35/3,82 (-589,79)	22,98/38,43 (67,23)	7,45/13,88 (86,31)	1,11/13,07 (1.077,47)	5,92/10,41 (75,84)	6,03/0,48 (-1.156,25)
	4,48/1,13 (-296,46)	3,91/11,33 (189,77)	1,27/4,09 (222,04)	0,19/3,85 (1.926,31)	1,01/3,07 (203,96)	1,03/0,14 (-635,71)
Variación porcentual anual (1950-60/1991-2000) ²	69,26	1.387,49	2.073	13.646,29	1.950,89	-7,99
Porcentaje de los incrementos 1950-60/1991-2000 ²	6,5 12,03	130,07 242,12	195,68 363,65	1.289,70 2.380,75	183,61 340,35	-7.528,33 -139,34
Variación relativa(1950-60/1991-2000) ²	-85,55 -74,85	27,94 121,01	85,13 215,38	1.081,81 1.761,01	76,27 206,45	-92,16 -98,63
% Gasto Estado y PIB (1950-1975/1976-2000) ¹	-211 -101	31 451	88 136	729 1.191	32 105	-495 -291
Variación porcentual anual (1950-1975/1976-2000) ²	51	514	462	3.790	520	-21
Porcentaje de los incrementos 1950-1975/1976-2000 ²	13,53 25,43	230 428	82 152	83 155	77 144	-1,19 -2,22
Variación relativa(1950-75/1976-2000) ²	-62,94 -42,49	11,19 72,19	125,71 1,88	8.183,46 1.190,90	32,14 104,82	-83,24 -74,06
R (1950-2000)	-1,31	3,92	2,57	6,28	3,76	4,41
Aumento per cápita (1950-2000)	25	1.352	609	10.041	1.419	-30

¹Primera fila: porcentajes de participación respecto al gasto total en las décadas de 1950 y 1990, respectivamente; tercera fila, porcentajes respecto al PIB. Filas segunda y cuarta, entre paréntesis, variaciones porcentuales entre ambos decenios. ² Variación entre los valores absolutos de los decenios de 1950 y 1990 ³Gasto hecho por el Estado, los organismos autónomos administrativos, los entes preautonómicos y las Comunidades Autónomas. R= tasa acumulativa

FUENTES. Elaboración propia a partir de Comín y Díaz (2005) y Cuentas de las Administraciones Públicas

Cuadro 3. Saldo presupuestario y deuda¹

	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EN CIRCULACIÓN
1950-1960	-34	3.293
1961-1970	21	3.178
1971-1980	-486	3.250
1981-1990	-2.062	5.357
1991-2000	-2.199	23.361
R (1950-2000)	4,30	2,09
Aumento per cápita (1950-60/1991-2000)	973	6.138

¹En miles de millones de pesetas constantes. R: tasa acumulativa
FUENTES. Elaboración propia a partir de Comín y Díaz (2005).

GRAFICO 1.
EVOLUCIÓN DEL PIB ESPAÑOL, 1950-2000

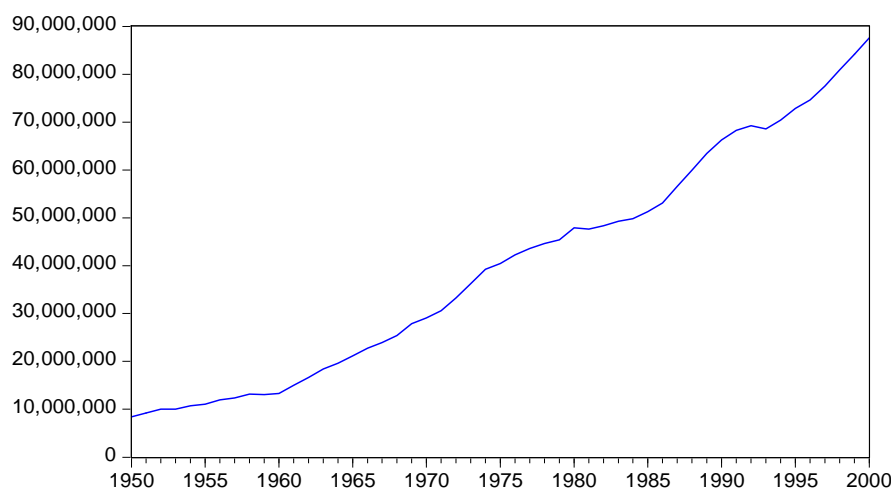


GRÁFICO 2.
FBCF EN ESPAÑA, 1950-2000

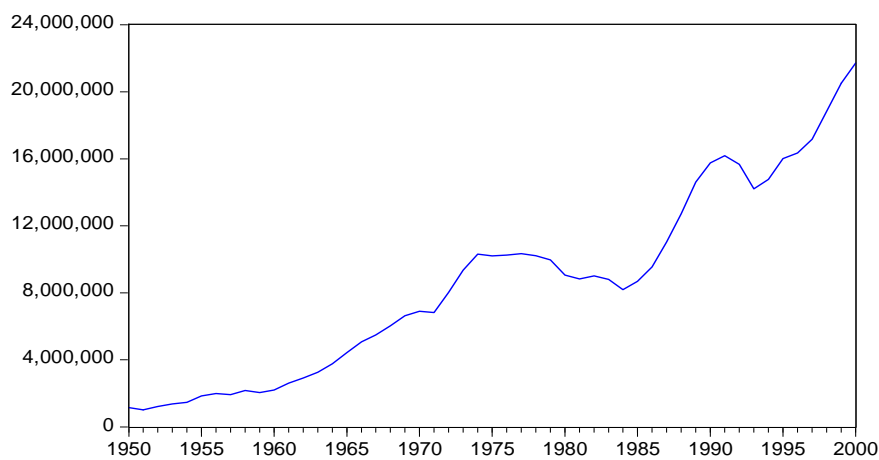


GRÁFICO 3.
GASTO MILITAR EN ESPAÑA, 1950-2000

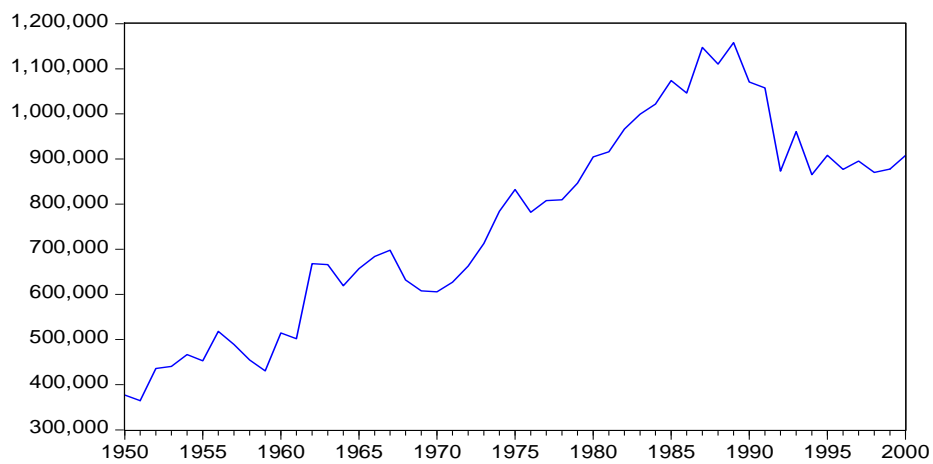


GRAFICO 4.
GASTO EN EDUCACIÓN EN ESPAÑA, 1950-2000

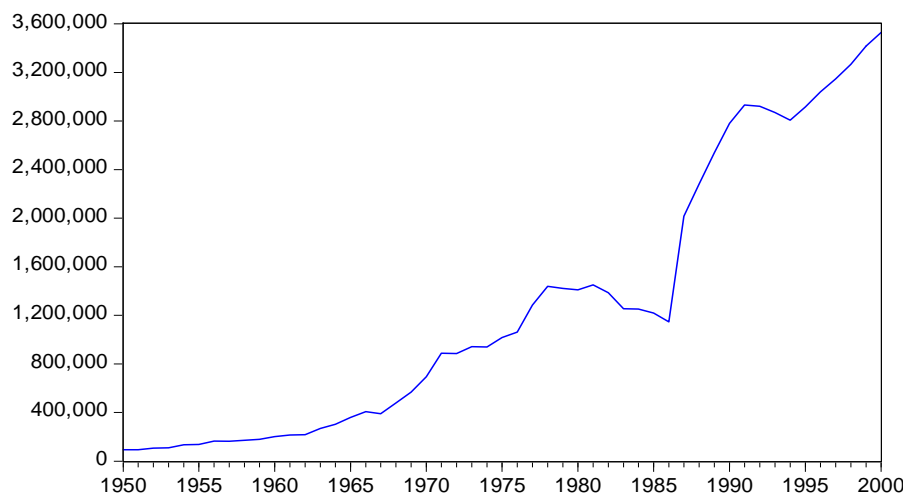


Gráfico 5. Gasto en sanidad, 1950-2000

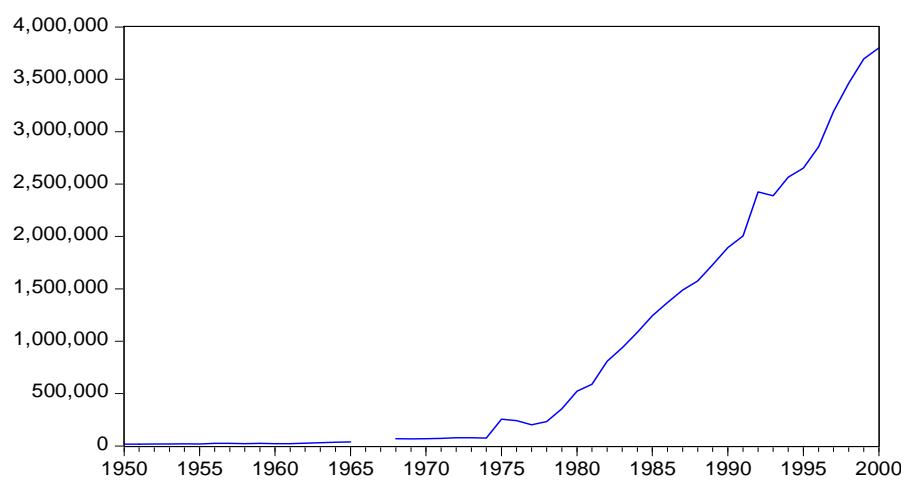


Gráfico 6. Gasto en pensiones, seguridad social y beneficencia, 1950- 2000

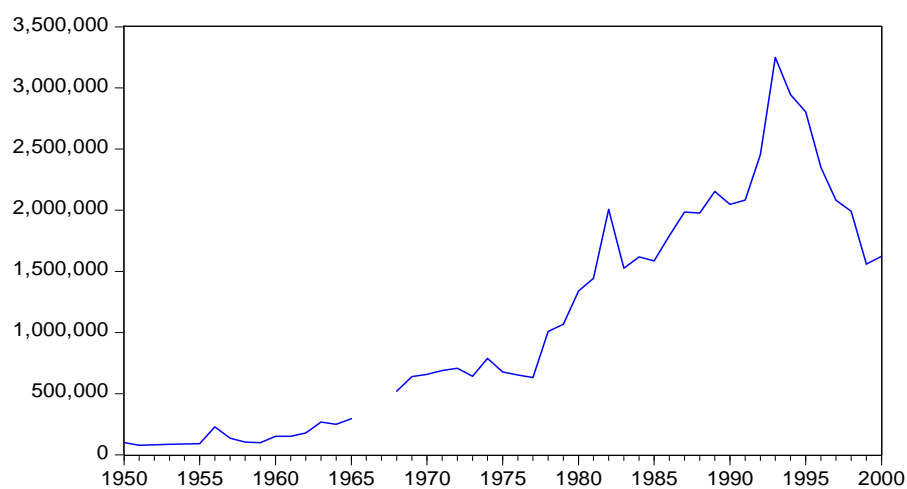


Gráfico 7. Saldo presupuestario, 1950-2000

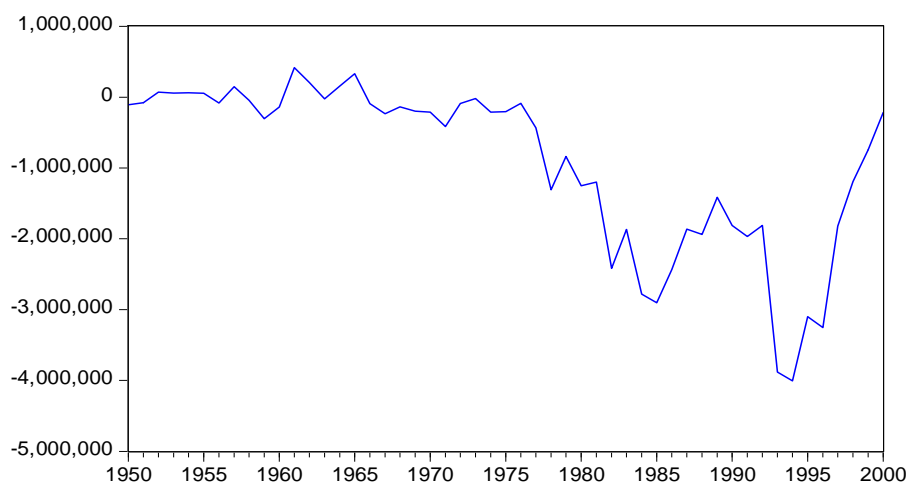
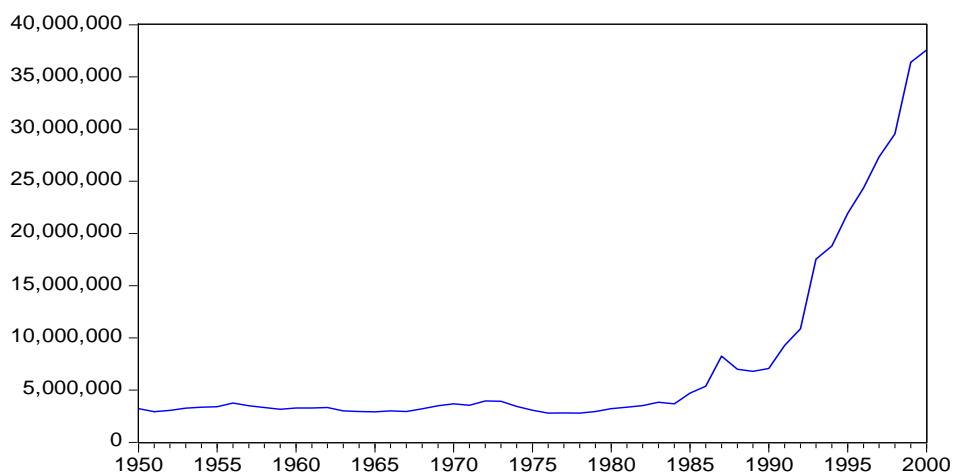


Gráfico 8. Deuda del Estado en circulación, 1950-2000



Fuentes gráficos 1 a 8: Elaboración propia a partir de las fuentes citadas en los cuadros 1, 2 y 3